

## ¿Fin de Régimen?

Tito ha cumplido ochenta y dos años y tiene una salud dudosa. Parece que algunos de los acontecimientos que están ocurriendo ahora en Belgrado, y que tienen todo el carácter de un retroceso político, están relacionados con las luchas internas por la sucesión. No es fácil explicar de otra manera que un país que ha conocido hasta ahora treinta años de un comunismo abierto y conciliante, con unas tendencias internacionales propias que le distanciaron del bloque soviético —no pertenece al Pacto de Varsovia ni al Comecon— y le llevaron a entrar en convenios con países de Occidente y a ocupar una posición muy importante entre los neutralistas, se revista ahora, precisamente ahora, en que el comunismo busca vías de conciliación y de colaboración —con otros partidos, con otros países—, se cierre firmemente la guardia yugoslava y adopte formas que para algunos representan un stalinismo incongruente en la nación que fue la primera en denunciar los errores stalinistas (1947: Tratados de Yugoslavia con Bulgaria, Hungría, Rumania. 1948: La URSS denuncia a Yugoslavia por intentar una federación balcánica en detrimento del bloque comunista. Expulsión de Yugoslavia de la Cominform. 1949: Esfuerzos de la URSS para derribar el Régimen de Tito. Veinte millones de dólares entregados por los Estados Unidos a Yugoslavia. 1950: Nuevos créditos de los Estados Unidos. 1953: Nueva Constitución. Visitas de Tito a los Estados Unidos. 1954: Tito, reelegido Presidente. Principio de reconciliación con la URSS tras la muerte de Stalin. 1955: Visita de Krutchev a Belgrado. Firma de una declaración de amistad entre la URSS y Yugoslavia por Tito y Bulgamin. Pero nueva frialdad tras los acontecimientos de Hungría. 1957: Entrevista Tito-Krutchev. Condena de Djilas por propaganda hostil al Régimen. 1958: Tito, reelegido. 1962: Entrevista Brejnev-Tito. Visita de Tito a Moscú. 1963: Nueva Constitución. Apertura del Régimen. «Boom» turístico. Empresa privada permitida con límites en algunos sectores económicos. 1970: Visita de Nixon. Liberalismo con respecto a la religión).

A finales de febrero, el mundo marxista se sorprendió por la noticia de que «Praxis», una de las revistas más leídas dentro del marxismo y portavoz habitual de la «vía yugoslava» hacia el socialismo, que desde 1965 representaba la posibilidad de discusiones teóricas y de diversas escuelas, había sido suspendida. Baumann, Kolakowski, Marcuse o Fromm figuraban entre sus colaboradores habituales; sus lectores eran principalmente los intelectuales y los estudiantes. «Praxis» se distinguía por una extrema

libertad en el tratamiento de las cuestiones marxistas desde dentro del marxismo. Estaba publicada por la Sociedad Filosófica Croata y la Unión de Filósofos Yugoslavos, organismos ambos subvencionados por el Estado. Hace ya un año, el subsidio estatal desapareció: Se interpretó como un desecho de las autoridades de desentenderse de la publicación. Pero en el mes de febrero, los editores de «Praxis» se encontraron con que el taller donde imprimían la revista se negaba a continuar el trabajo. Intentaron publicarla en otros, pero resultó que todos los talleres de Belgrado rehusaban hacerse cargo de «Praxis». De esta forma, «Praxis» ha dejado de publicarse sin ser objeto de ninguna prohibición formal. Teóricamente, «Praxis» puede seguirse publicando; técnicamente, no.

Unos días después, otra noticia coincidente: El escritor Mihajlo Mihajlov va a ser juzgado por propaganda subversiva. Y un cierto número de profesores de Universidad han sido separados de sus cargos por «corrupción de la juventud». Mihajlo Mihajlov es un escritor político —un teórico del marxismo—, más atacado en la URSS que en la propia Yugoslavia. Hace diez años fue encarcelado por presiones soviéticas, después de haber asegurado que Stalin precedió a Hitler en el genocidio. Sin embargo, desde hace años escribe libremente en publicaciones extranjeras, sin dejar de residir en Belgrado, artículos extremadamente duros contra Tito y el Régimen. Desde hacía tiempo estaba indicando que Tito se inclinaba hacia un neostalinismo que desmentía la «vía yugoslava». No había sido molestado hasta ahora. Al detenerle dijo: «En Yugoslavia, todo aquel que es detenido por razones políticas resulta indefectiblemente condenado». En efecto, el Tribunal le ha condenado a siete años de prisión por propaganda subversiva.

Tito ha tocado este tema —como el de la expulsión de los catedráticos— en un discurso improvisado ante la Liga de Comunistas de Yugoslavia, que celebraba una reunión a nivel de Comité Central. Ha explicado que «Mihajlov se ha hecho célebre por un panfleto sobre la Unión Soviética: Esta es su única y principal obra literaria». Pero ha confirmado, sin dejar lugar a dudas, el nuevo rigor del Régimen al anunciar una exacerbación de la lucha «contra las manifestaciones negativas» y los «grupos y grupúsculos» que tratan de dificultar la acción de la Liga. Ataques y manifestaciones que atribuye esencialmente a manejos del extranjero. Yugoslavia —dijo— no tiene que tener miedo de la URSS, «porque la URSS no tiene ni siquiera el pensamiento de atacarnos», pero tampoco lo tiene de «aquellos que en Occidente

querrían romper Yugoslavia, dividirla en pedazos».

Los rasgos de nueva dureza del Régimen han estado presentes, más que en Tito, en Jure Billitch, miembro del Comité Central, representante de Croacia. Ha hablado también de las «manifestaciones negativas», que considera «heredadas de la antigua sociedad, y porque «la filosofía y la psicología burguesas están todavía vivas en nuestra sociedad». En las escuelas religiosas se propaga el odio al Régimen, y la prensa eclesiástica «se está transformando en tribuna política». Ha rebatido las denuncias de stalinismo, que parten «de la pretendida nueva izquierda, que, desde el extranjero, alimenta la campaña contra Yugoslavia»; los que pretenden intentar un Régimen de pluralidad de partidos son «la élite intelectual», cuyo obje-

tivo es desmontar al proletariado del poder y apoderarse de él, del Estado y del partido. «De todas formas, responderemos a la oposición por el desarrollo resuelto de la autogestión, pero también con medidas enérgicas contra aquellos que, al servicio del extranjero, amenazan la independencia y la libertad de nuestros pueblos».

La sensación de «fin de Régimen» se acentúa con estas nuevas represiones, con una situación económica compleja, con el regreso de los trabajadores inmigrantes y con la edad de Tito.

Pero el propio Tito ha vuelto el 3 de marzo a elevar una voz dura en su discurso de constitución del Consejo Federal: Ha anunciado que aplastará sin contemplaciones la subversión, y que el Estado dispone de fuerzas suficientes para ello. ■

## TRAS EL SECUESTRO Y LIBERACION DE LORENZ

### Contra la pena de muerte

Apenas salido de su secuestro, Peter Lorenz, jefe de los demócratas cristianos de Berlín, ha declarado su oposición total a la pena de muerte: «He sido, soy y seré opuesto al castigo capital». Y también a unas formas de refuerzo de la Policía que se asemejen a una Policía política o de Estado: «Somos una sociedad abierta, y debemos permanecer adheridos a nuestro sistema democrático».

Así sale urgentemente al paso de una tendencia surgida en su propio partido, la CDU, para el restableci-

ge Strauss —jefe visible de la derecha dura (ver TRIUNFO, número 648)— y principalmente del vicepresidente del Bundestag de Alemania Federal, Jaeger; pero también han tenido un portavoz importante en Dregger, presidente de la CDU de Hesse. La pena de muerte está abolida desde la fundación misma de la RFA, y lo que ahora se pretende es su restablecimiento en caso de asesinato o de secuestro con asesinato. Inmediatamente, los elementos liberales han hecho saber su negación, y la unión momentánea entre



Peter Lorenz durante la conferencia de prensa, que celebró después de ser liberado: «He sido, soy y seré opuesto al castigo capital».

miento de la pena capital. Prefiere que «se corran riesgos» con tal de no perder la imagen democrática. Las voces más fuertes en favor de la pena de muerte surgen de la CSU, el partido de origen bávaro que diri-

todos los partidos de carácter demócrata —poder y oposición— a propósito del secuestro de Lorenz se ha vuelto a romper. Se anuncia un debate sobre medidas de seguridad interior en Alemania Federal: ▶



el tema de la pena de muerte y el de refuerzo de la Policía política provocaron grandes discusiones. Pero el testimonio de Lorenz y su oposición a la pena de muerte pesarán mucho.

No es Alemania Federal el único país en el que se debate la pena de muerte. En Francia, donde existe, aunque se aplica muy escasas veces, el ministro de Justicia y hombre de confianza de Giscard, Pontiatowski, insiste con frecuencia y vigor en que debe haber condenas de muerte y se deben cumplir. No es sólo en este tema: una mayoría de la población francesa parece también partidaria del mantenimiento de la guillotina como institución (estas encuestas tienen en este caso un valor relativo: se hacen en el momento o a continuación de grandes sucesos sangrientos, y se impregnan de la emoción del ambiente).

Dos naciones han restaurado la pena de muerte: Japón y Filipinas. Suecia, en cambio, la ha abolido totalmente de sus Códigos. Argentina la abolió en 1973 en el Código Civil, pero la mantiene en el Militar. Canadá ha abierto una moratoria de cuatro años en las ejecuciones, con el fin de estudiar estadísticamente la variación de los delitos durante este tiempo. En algunos países federales —Estados Unidos, Australia, México—, algunos Estados mantienen la pena de muerte, otros la han abolido.

La tendencia mundial es la abolicionista. Dentro de esta tendencia, los grupos de derecha conservadora o los países dirigidos por ella son

partidarios de la pena de muerte, los liberales y de izquierda son abolicionistas, y lo explican, más que en defensa de los condenados (que pueden regenerarse o pueden haber sido erróneamente condenados), en defensa de la misma sociedad, de su dignidad y de su moral: Creen que a una sociedad violenta corresponderán unos marginados violentos. Corresponde esta separación a las bases filosóficas de las doctrinas: la derecha cree en la maldad del hombre —el pecado original—, que requiere fuerza y castigo para contenerle; la izquierda, en una bondad natural, que estaría alertada por la mala organización de la sociedad, y, por lo tanto, cree que las reformas sociales son mejor que el castigo.

Las Naciones Unidas se han pronunciado numerosas veces en contra de la pena de muerte y han instado a las naciones miembros a la abolición: tanto por parte del Consejo Económico y Social —que ha realizado un informe acerca del tema— como por la Asamblea General. Los estudios estadísticos realizados en los años 1962 y 1972 por las Naciones Unidas demuestran que la pena de muerte no es un arma disuasoria del crimen: los mismos delitos se cometen en países abolicionistas como en países ejecutores; dentro de los países que han suprimido la pena de muerte no ha habido aumento en la criminalidad. El secretario general de las Naciones Unidas, Waldheim, dice en un informe actual que estos informes han promovido una mayor tendencia al abolicionismo en los países miembros. ■

## CHILE

# El caso Bonilla o un helicóptero con mala suerte

● Los helicópteros son aparatos que vuelan, pueden sufrir un accidente y caerse. En ese caso es muy frecuente que sus ocupantes se maten. El helicóptero en que viajaba el general Oscar Bonilla, ministro de Defensa chileno, se cayó el 3 de marzo y el general se mató. La explicación oficial: accidente. «Una desgracia para el país», declaró Pinochet. Tres días de duelo nacional y todo en orden.

Nadie, aparte de los íntimos que hayan podido estar en la organización de un eventual atentado, tiene todavía elementos para desmentir esta cómoda versión. Pero eso no puede impedir que se señale una serie de factores que hacían de esa muerte algo teóricamente deseable para la ultraderecha chilena. Ni puede impedir que se recuerde que esa misma ultraderecha no ha vacilado en utilizar medios expeditivos para eliminar a generales molestos: René Schneider, asesinado en 1970; Bachelet, cuasi asesinado (torturas que le provocaron su tercer infarto), a comienzos de 1974, y Carlos Prats,

asesinado en Buenos Aires en octubre del mismo año.

Bonilla no era ningún ángel. Fue el hombre que enfrentó a Prats, comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa de Allende, para resquebrajar su autoridad y remover el último obstáculo institucional-militar que se oponía al golpe de Estado (por ese entonces, Pinochet todavía seguía jurando lealtad al Presidente). La mujer de Bonilla encabezó la manifestación de esposas de oficiales que abuchearon a Prats durante horas frente a su casa y lo llevaron a la dimisión en agosto de 1973. Durante y después del golpe, Bonilla, ministro de Interior del nuevo Gobierno, fue cabeza y brazo de la implacable represión que se abatió sobre los chilenos.

Pero el general tuvo la habilidad de combinar este aspecto abominable de su faena con una demagogia populista que lo llevaba a visitar las poblaciones marginales, a decirse preocupado por la suerte de miles de desocupados, a proponer, por fin, una reducción de la represión

seis meses después del golpe, probablemente en vista del peligroso aislamiento político del Régimen. De hecho, las torturas y las detenciones disminuyeron sensiblemente entre febrero y julio de 1974, y volvieron a recrudescerse con la designación del actual ministro del Interior, general Benavides.

Hombre públicamente vinculado a Eduardo Frei, de quien fue su edecán militar durante su período presidencial (1964-70), llegó a ser considerado la principal figura visible de las «palomas» (en un reino de «halcones»), interlocutor válido para la contestación de la Iglesia, personaje de recambio para una apertura menos antidemocrática del Régimen (margen de libertades políticas, cese de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos, incorporación de civiles al Gobierno, etcétera), que contaría con el apoyo de la cúpula demócrata-cristiana. Se habló entonces que otros dos generales importantes, Arellano y Palacios, formarían parte del «grupo Bonilla».

Su desplazamiento del Ministerio del Interior al de Defensa, a mediados del año pasado, nunca tuvo



General Oscar Bonilla: ¿accidente o atentado?

una explicación definitiva. Para algunos fue un ascenso que lo colocaba en mejor posición para un eventual relevo de Pinochet; para otros, una disimulada caída en desgracia.

Su dura polémica con el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, hace unos meses, fue interpretada por los partidarios de la segunda versión como un intento de «hacerse perdonar» sus veleidades progresistas.

Mientras tanto, la disputa por el poder entre las distintas Armas que participaron en el golpe contra Allende se iba definiendo primero a favor del Ejército, y dentro de éste, netamente por un fortalecimiento del general Augusto Pinochet, en un primer momento presidente de la Junta Militar; después, Jefe de Estado, y ahora, Presidente.

Este encumbramiento no se alcanzó sin fricciones y depuraciones. Fueron muchos los militares que durante este año y medio pasaron a retiro, y solamente durante el último mes, cuarenta coroneles fueron licenciados.

Bonilla era un obstáculo de mayor altura: además de tener la titularidad del Ministerio de Defensa, era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas: una concentración de poder que tenía que alarmar a los «duros». Más, cuando por tener la primera antigüedad del Ejército, era el sucesor obligado de Pinochet.

Curiosamente, Bonilla, cuya locuacidad parecía incontrolable, desaparición de todo contacto público entre noviembre y diciembre del año pasado. Entonces corrieron rumores de que había sido arrestado; tan insistentes, que hicieron necesario un desmentido oficial que calificó las versiones de «ridículas y pueriles».

Queda, por fin, un dato que puede encerrar una especial importancia: Kissinger, según se anunció, viajará a Chile en abril, y Bonilla, cabía esperarlo, sería una de las personas con quienes conversaría si los manes de Washington se inclinan por un lavado de cara del Régimen chileno. Algo que puede volverse una necesidad para los norteamericanos, dado el unánime repudio internacional que se ha ganado el Gobierno de Pinochet, y que, inevitablemente, arrastra también a los Estados Unidos, cómplices confesos (después de las declaraciones de Ford y Kissinger admitiendo la participación de la CIA) del derrocamiento de Allende.

La muerte de Bonilla, si ella no se debió a los desperfectos de un helicóptero desventurado y a la consiguiente acción de la ley de gravedad, puede ser una advertencia seria para los militares partidarios de una apertura, buscaría cohesionar a las Fuerzas Armadas en base al terror interno e indicaría que el Régimen chileno ha decidido que su único argumento de supervivencia seguirá siendo la intensificación del crimen, sea quien sea la víctima. Aunque se trate de un viejo cominche. ■

## U. S. A. / CUBA

# Una diplomacia lenta

● Kissinger, el 1 de marzo, hablando en Houston: «Si las sanciones decididas en 1964 por la Organización de Estados Americanos

se levantasen, los Estados Unidos estarían preparados para moverse en una nueva dirección en sus relaciones bilaterales con Cuba». Peque-